



JUZGADO QUINCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO

SEÑOR JUEZ 15 ADMINISTRATIVO DE CALI
ROGERS ARIAS TRUJILLO

E. S. D.

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA
RADICACIÓN: 76001-33-33-015-2024-00103-00
DEMANDANTE: JANET VIVIANA RUIZ GÓMEZ Y OTROS
DEMANDADO: DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI Y
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI
EICE ESP
ASUNTO: CONTESTACIÓN DEMANDA DISTRITO ESPECIAL DE
SANTIAGO DE CALI

AURA MARIA BENAVIDES, mayor de edad, vecino de Cali, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.112.460.391 de Jamundí, abogada titulada con tarjeta profesional N. 220.484 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de apoderado del Distrito Especial de Santiago de Cali, conforme con el poder especial conferido por la Doctora **MARIA XIMENA ROMAN GARCIA**, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número 66.811.466, Directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, nombrada mediante Decreto No.4112.010.20.0001 de 01 de enero de 2024 y Acta de Posesión No. 016 de 01 de enero de 2024, debidamente facultada por el Doctor **ALEJANDRO EDER GÁRCES**, identificado con la cédula de ciudadanía número 94.453.964, en su condición de Alcalde del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicio de Santiago de Cali y representante legal del mismo, según Decreto No. 4112.010.20.0010 de enero 03 de 2024 “Por medio del cual se efectúa una delegación en materia de representación judicial, administrativa y extrajudicial, y se dictan otras disposiciones”, para que represente judicialmente a la Entidad Territorial, de manera atenta descorro el traslado para contestar la demanda que en el medio de control de la referencia se interpuso contra el Distrito Especial de Santiago de Cali y otros.

I. OPORTUNIDAD

El artículo 48 de la Ley 2080 de 2021 -que modificó el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011-, establece que el auto admisorio de la demanda contra entidades públicas, se debe notificar personalmente mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones judiciales a que se refiere el artículo 197 de la Ley 1437 de 2011. A su vez, el artículo 172 *ejusdem*, señala que el término del traslado dentro del cual se debe contestar la demanda, es de treinta (30) días y comenzará a correr de conformidad con lo previsto en el artículo 199.

Por su parte, el artículo 8º de la Ley 2213 de 2022, dispone que la notificación personal **“se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a contarse cuándo el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje”**.

El auto admisorio de la demanda del asunto, fue notificado al correo dispuesto por el DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI para recibir notificaciones judiciales, el día jueves 4 de julio de 2024; en consecuencia, el término para contestar la demanda empezó a contar a partir del martes 9 de julio, y por lo tanto, se contesta dentro del término del traslado.

II. **SÍNTESIS DEL LITIGIO**

A través de este medio de control, se pretende la declaratoria de responsabilidad administrativa del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, por los presuntos perjuicios sufridos en ocasión a las lesiones de la señora JANET VIVIANA RUIZ, en un supuesto accidente de tránsito ocurrido el 19 de noviembre de 2022 aproximadamente a las 10:30 a.m., cuando conducía una motocicleta de placas IHM87B por la Calle 70 con carrera 1ra. y supuestamente sufrió una caída por el al estado de una alcantarilla conexas a un hueco en la vía.

Es de anotar que ni en la demanda o en sus anexos, se aporta prueba idónea que **demuestre con certeza** las condiciones de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el presunto accidente, ni la participación de la víctima en la producción del daño, siendo ésta una carga exclusiva de la parte actora a la luz del artículo 167 del Código General del Proceso.

III. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS

AL HECHO PRIMERO: No me consta, es un hecho que debe ser probado por la parte demandante. La causa determinante del presunto accidente y los supuestos daños o perjuicios causados, son materia de litigio y deben ser probados por la parte actora.

AL SEGUNDO: No me consta, esto deberá ser probado por la parte demandante. Ahora bien destaca del mencionado informe de accidente de tránsito que la causa del mismo corresponde a hipótesis No. 157¹, la cual es atribuible a otras causas por responsabilidad del conductor.

AL HECHO TERCERO: No me consta; es un hecho que debe ser probado por los demandantes.

IV. FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA:

Me opongo a todas y cada una de ellas, y en consecuencia solicito respetuosamente al Honorable Despacho, **DENEGAR** las Pretensiones de la demanda y abstenerse de declarar administrativamente responsable al Municipio de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura, ni condenar patrimonialmente por los perjuicios morales y daño a la salud, por los hechos acaecidos el 19 de Noviembre de 2022 a **JANET VIVIANA RUIZ GÓMEZ RUIZ**, en los cuales resultó lesionada cuando presuntamente sufrió caída por volcamiento de vehículo tipo motocicleta de placas IHM87B, la altura de la calle 70 con carrera 1a de la ciudad Santiago de Cali (V), toda vez que la parte demandante incumplió con la carga probatoria de probar la falla y el nexo de causalidad entre ésta y el daño.

¹ HIPÓTESIS DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO RES. 0011268 DE DIC. 6 DE 2012

Como se puede observar del escrito de demanda y el material probatorio allegado, las condiciones de modo, tiempo y lugar de los presuntos hecho no son claros o no resultan tener sustento probatorio. Frente al particular cabe resaltar que la causa probable del accidente de tránsito según el informe de policía de tránsito corresponde a causa atribuible al conductor bajo código 157.

DEL CONDUCTOR	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">157</div>	DEL VEHICULO	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">157</div>	DEL PAIS	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">157</div>
OTRA	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">157</div>	DE LA VIA	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">157</div>	DE PAIS	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">157</div>
12. TESTIGOS ESPECIFICAR CUAL: <i>Perdida de control del vehiculo</i>					

Aunado a lo anterior de la lectura de la historia clínica se observa en reiteradas observaciones los médicos tratantes una anotación que destaca como causa del accidente la de “alta carga de energía cinética”, lo que puede ingerirse o significa que la conductora señora **JANET VIVIANA RUIZ GÓMEZ RUIZ** transitaba a alta velocidad.

1911	SERVICIO: LEIDY TATIANA PALACIOS RACINES - ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL H. SUJETIVO: H. OBJETIVO: ANALES: PLAN: **INDICIA MEDICA** PACIENTE EN CONTEXTO DE POLITRAUMATISMO SECUNDARIO A ACCIDENTE DE TRANSITO DE ALTA CARGA DE ENERGIA CINETICA, CON TRAUMA CONTUSO DE TORAX Y DOLOR TORACICO, CON SATURACION DE OXIGENO LIMFOTICO 86-91%, REFIERE DOLOR TORACICO INTENSO Y DEBIDA SE CANCELA ORDEN DE RADIOGRAFIA DE TORAX, SE INDICA TOMA DE TAC DE TORAX PARA DESCARTAR LESION VASCULAR O DE ORGANOS INTRATORACICOS.
	
Profesional: LEIDY TATIANA PALACIOS RACINES CC - 1144693425 - T.P. 1144693425 Especialidad - MEDICINA GENERAL	

Así las cosas, resulta claro que dentro del libelo de demanda no existen pruebas que confirmen o demuestren que las lesiones presentadas por la, son producto o consecuencia de la responsabilidad antijurídica del Distrito Especial de Santiago de Cali, por el contrario, podría predicarse como única causa del daño, culpa exclusiva de la víctima, ante su deber de diligencia y cuidado al desarrollar un actividad de riesgo, como lo es conducir una motocicleta.

En virtud de lo anterior, solicito no condenar a mi representado Municipio de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura, al reconocimiento y pago de los

perjuicios materiales y/o morales aludidas, ni a las costas procesales, ni demás valores solicitados por el apoderado en el libelo de la demanda, lo que hago fundado en las excepciones que más adelante propondré.

V. FRENTE A LAS DECLARACIONES Y CONDENAS

El Distrito Especial de Santiago de Cali no es responsable de resarcir los perjuicios solicitados por la señora **JANET VIVIANA RUIZ GÓMEZ RUIZ**, y Otros.

Por tal razón, me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la parte actora, porque, como quedará demostrado en el discurrir del proceso, no le corresponde al Municipio de Santiago de Cali- Secretaría de Infraestructura, responder por las afectaciones generadas a la demandante con ocasión al accidente de tránsito de fecha 19 de noviembre de 2022.

- A los Perjuicios Inmateriales

Morales:

Objeto y me opongo a que se emita condena por concepto de perjuicios morales por el monto total de 100 S.M.L.M.V que solicitan **JANET VIVIANA RUIZ GÓMEZ RUIZ**, y Otros en su demanda. Esta objeción se presenta considerando la inexistencia de pruebas de una responsabilidad atribuible al Distrito Especial de Santiago de Cali, de los perjuicios reclamados y por ende una falta de acreditación de estos.

Lo anterior toda vez que:

“[E]n relación con el perjuicio moral ha reiterado la jurisprudencia de la Corporación que la indemnización que se reconoce a quienes sufran un daño antijurídico tiene una función básicamente satisfactoria y no reparatoria del daño causado y que los medios de prueba que para el efecto se alleguen al proceso pueden demostrar su existencia pero no una medida patrimonial exacta frente al dolor; por tanto, corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta los criterios generales contemplados por la Sala Plena de la Sección Tercera, en las sentencias de unificación jurisprudencial sobre la indemnización de perjuicios morales derivados de lesiones a una persona, proferidas el 28 de agosto de 2014

Este entendimiento es congruente con la posición reiterada por la Sala Plena de la Sección Tercera, en el sentido de señalar la necesidad de acreditación probatoria del perjuicio moral que se pretende reclamar"

[...]

Huelga aclarar que para el reconocimiento del perjuicio moral derivado de lesiones deberá tenerse en cuenta "la valoración de la gravedad o levedad de [aquella] reportada por la víctima".

Al respecto el Consejo de Estado en sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 31172, M.P. Olga Mélida Valle de la Hoz, estableció entre otras cosas que:

(...) "El precio del dolor está llamado a establecerse por - Arbitrium Judicis fundado en las pruebas que reposen en el plenario, en ese orden de ideas, si la prueba plena del perjuicio no obra, difícilmente la sana crítica y las reglas de la experiencia de las que se vale legítimamente el operador judicial podrán permitirle establecer vía compensación una afectación a un bien personalísimo, mucho menos tendrá algo por tasar o establecer" (...)

Así mismo es de señalar que estos han sido tasados en forma excesiva, siendo llevados al monto de 100 S.M.L.M.V para cada uno de los demandantes. El Consejo de Estado ha fijado como referente en la liquidación del perjuicio moral para eventos de lesiones, la valoración en cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y quienes acuden a la justicia en calidad de víctimas indirectas.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
OFICINA DE INVESTIGACIÓN

REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE LESIONES					
GRAVEDAD DE LA LESIÓN	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
	Víctima directa y relaciones afectivas conyugales y paterno-filiales	Relación afectiva del 2º de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos)	Relación afectiva del 3º de consanguinidad o civil	Relación afectiva del 4º de consanguinidad o civil	Relaciones afectivas no familiares - terceros damnificados
	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.
Igual o superior al 50%	100	50	35	25	15
Igual o superior al 40% e inferior al 50%	80	40	28	20	12
Igual o superior al 30% e inferior al 40%	60	30	21	15	9
Igual o superior al 20% e inferior al 30%	40	20	14	10	6
Igual o superior al 10% e inferior al 20%	20	10	7	5	3
Igual o superior al 1% e inferior al 10%	10	5	3,5	2,5	1,5

También se ha señalado que la acreditación de los perjuicios morales es necesaria, sin perjuicio de aquellos eventos en los que se aplican presunciones derivadas del parentesco, que pueden desvirtuarse demostrando la debilidad de la relación familiar.

Daño a la salud:

Objeto y me opongo a que se emita condena por concepto de un daño a la salud por el monto de 150 S.M.L.M.V para la señora **JANET VIVIANA RUIZ GÓMEZ RUIZ**, en atención a la inexistencia de pruebas de una responsabilidad atribuible al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.

- A los Perjuicios Materiales

De manera general me opongo al reconocimiento de los perjuicios materiales reclamados, en atención a la inexistencia de pruebas de una responsabilidad atribuible al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI; también, por la falta de acreditación plena y exhaustiva de su existencia.

VI. FUDAMENTOS DE LA DEFENSA

La parte demandante solicita se declare administrativamente al Distrito Especial de Santiago de Cali y que, como consecuencia, se le condene a pagar unas sumas de dinero por perjuicios materiales (lucro cesante) y perjuicios inmateriales (morales y a la salud) sin acreditar circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon el accidente de tránsito, pues de la revisión a la carga probatoria que acompaña la demanda, debiendo mostrar especial diligencia y cuidado.

Ahora bien, señala la parte actora que la conducta de la Administración se enmarca en una falla del servicio por falta de mantenimiento vial como causa generadora del accidente de tránsito.

Es importante traer a colación, el pronunciamiento de la Sección Tercera del Honorable Consejo de Estado, Consejera Ponente: STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO, Radicación Numero: 20001-23-31-000-1999-00499-01(22941), Bogotá D.C., catorce (14) de junio de dos mil doce (2012), en los siguientes términos:

...” ACCION DE REPARACION DIRECTA - Accidente de tránsito por mal estado de la vía / CARGA DE LA PRUEBA - Definición / CARGA DE LA PRUEBA - Requisitos

La carga de la prueba es “una noción procesal que consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes la autorresponsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las normas jurídicas cuya aplicación reclaman aparezcan demostrados y que, además, le indica al juez cómo debe fallar cuando no aparezcan probados tales hechos (...) se trata de una noción que se acompasa con los valores de libertad, autorresponsabilidad, diligencia y cuidado sumo en la ejecución de la conducta procesal que mide y proyecta las afirmaciones y negativas y repercute en la decisión. (...) sobre su contenido material, es dable afirmar que la carga de la prueba tiene que ver (i) con la posibilidad de obrar de determinada manera en pro de conseguir un resultado jurídico (constitutivo, declarativo o de condena) esperado de un proceso y (ii) con reglas indicativas de cómo deberá resolverse cuando la ausencia de pruebas impida que el juez adquiera certeza o convencimiento

respecto de los asuntos sometidos a su conocimiento. A lo anterior se debe agregar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

NEXO CAUSAL - Elemento para establecer responsabilidad del Estado / ELEMENTO DE CAUSALIDAD - No se probó

De conformidad con la regla onnus probando incumbit actori, le correspondía a la parte demandante, en los términos señalados en el art. 177 del C.P.C., pues quien pretende derivar de los hechos que alega consecuencias patrimoniales a su favor y a cargo de quien convoca al proceso, le incumbe demostrar esos supuestos fácticos. En este sentido, la Sala encuentra que, aunque está demostrada la ocurrencia del accidente y así mismo la causación de algunos perjuicios a los demandantes, no se estableció el elemento causal que vincule al Invías o al municipio de San Martín con la colisión. (...) no sólo la parte demandante fue displicente en la acreditación de la falla y su atribución a las entidades públicas demandadas, sino que la relación de causalidad entre esa irregularidad y el accidente se desvanece cuando en el plenario se acreditó que la víctima percibió la excesiva velocidad con que se desplazaba el tercero que causó la colisión y este, a su vez, reconoció ante las autoridades de tránsito que no pudo evitar el impacto porque se quedó sin frenos.”

También se observa que la parte actora omite en la demanda información relativa a las circunstancias fácticas en que ocurrió dicho accidente, ejemplo, a qué velocidad se desplazaba la señora **JANET VIVIANA RUIZ GÓMEZ RUIZ** al momento del accidente, qué maniobra adelantaba, de dónde venía y hacía donde se dirigía, es decir, no informa sobre aspectos relevantes para determinar, las causas eficientes del accidente.

Aunado a lo anterior, es preciso indicar que del informe de policía de tránsito aportado en los anexos de la demanda no se logra establecer con claridad las condiciones en las que se presentaron los hechos y se destaca de este, como se ha indicado en párrafos anteriores que, la causa del mismo según hipótesis plasmada por el agente de tránsito, corresponde a **causa atribuible al conductor**, que aunado

a los demás elementos consignados en el IPAT se logra establecer, que la causa corresponde a la falta de diligencia y cuidado de la señora JANET VIVIANA RUIZ, al realizar una actividad peligrosa, como lo es conducir una motocicleta.

Así las cosas, se solicita que se desestimen las pretensiones ya que no está acreditado plenamente el hecho de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, pretendidas y que, contrario a ello, es clara la responsabilidad de la víctima en los hechos narrados en la demanda.

Es de señalar que la jurisprudencia y la doctrina se han ocupado del estudio de las causas de los accidentes de tránsito, encontrando que debe analizarse las causas atribuibles al factor humano (el conductor y sus aspectos físicos), el entorno, esto es las características de la vía, y del vehículo (estado técnico-mecánico).

Es importante dimensionar que el conducir implica para quien lo realiza, tomar las precauciones, precaver los eventos que se puedan presentar, estar alerta y cumpliendo las exigencias del Código de Tránsito Terrestre para el desplazamiento de vehículos por las vías de la ciudad.

Como lo ha sostenido la jurisprudencia al tratar la actividad riesgosa del manejo de automotores, ha admitido que es obligatorio ejercer esta actividad bajo el esquema de “manejo a la defensiva”, ello implica un despliegue especial de la atención y percepción por parte de los sujetos que la asumen. Sobre la conducta y previsión que le cabe asumir a los conductores de vehículos, el Consejo de Estado se pronunció en los siguientes términos:

“... Quien conduce debe prever aun aquellos eventos derivados de la imprudencia o inobservancia de los demás, ello tiene su límite en la razonable probabilidad del peligro y por ello no puede pretenderse del conductor la previsión de la remota posibilidad ; a él se le exige es una actitud síquica en la que prevea aquellos sucesos que se presentan con notorio grado de probabilidad, es decir, en lo que la ocurrencia del daño a un interés jurídico pueda ser evitada con su contribución activa; más allá de este límite su conducta se desplaza a lo fortuito o a la fuerza mayor...”

Frente al asunto que nos ocupa, se concluye que el accidente al que se hace mención en la demanda no es atribuible a mi representado Distrito Especial de Santiago de Cali, y la única hipótesis que surge como causa del mismo es una culpa de la víctima, quien, al desplazarse conduciendo una motocicleta sin tomar las precauciones necesarias, como quiera que se encontraba realizando una “actividad peligrosa”, lo que demandaba conducir con mayor cuidado y respetando la normatividad que rige para la circulación de dichos vehículos y a la velocidad permitida, lo que le hubiese posibilitado maniobrar y observar los posibles obstáculos de la vía para superarlos sin dificultad, es decir el conductor de la motocicleta con su actuar infringió disposiciones del Código de Tránsito Terrestre.

Así pues, le correspondía a la señora **JANET VIVIANA RUIZ GÓMEZ RUIZ**, conducir la motocicleta atendiendo las disposiciones del **Código Nacional de Tránsito que en su artículo 55** versa sobre la obligatoriedad para toda persona que tome parte en el tránsito, como conductor o como peatón, de comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a los demás y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que le den las autoridades de tránsito.

Ahora bien, el artículo 94 del Código de Tránsito Terrestre establece que:

“LEY 769 DE 2002 “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”. CAPITULO V. CICLISTAS Y MOTOCICLISTAS.

ARTÍCULO 94. NORMAS GENERALES PARA BICICLETAS, TRICICLOS, MOTOCICLETAS, MOTOCICLOS Y MOTOTRICICLOS:

*Los conductores de bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y moto triciclos, estarán sujetos a las siguientes normas: **Deben transitar por la derecha de las vías a distancia no mayor de un (1) metro de la acera u orilla y nunca utilizar las vías exclusivas para servicio público colectivo.***

Los conductores de estos tipos de vehículos y sus acompañantes deben vestir chalecos o chaquetas reflectivas de identificación que deben ser visibles cuando se conduzca entre las 18:00 y las 6:00 horas del día siguiente, y siempre que la visibilidad sea escasa. deben usar las señales

manuales detalladas en el artículo 69 de este código. Reglamentado por la Resolución del Min. Transporte 1737 de 2004”.

A partir de lo prescrito por el artículo 63 del Código Civil, la culpa es la conducta reproachable de la víctima, por violación del deber objetivo de cuidado, al no prever los efectos nocivos de su acto o, habiéndolos previsto, confió imprudentemente en poder evitarlos. Reviste el carácter de culpa grave aquel comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, al paso que el dolo es asimilado a la conducta realizada con la intención de generar daño a una persona o a su patrimonio.

Así lo ha entendido el máximo órgano dentro de la Jurisdicción Administrativa, verbigracia de esto es el pronunciamiento del veintisiete (27) de noviembre del dos mil diecisiete (2017) radicación número: 05001-23-31-000-2012-00690-01 (54121) consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

“(…) La culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad del Estado^[1].

Las denominadas causales eximentes de responsabilidad □ fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima □ constituyen diversos eventos que dan lugar a la imposibilidad de imputar la responsabilidad a la persona o entidad que obra como demandada dentro del proceso de reparación de daños^[2].

Particularmente, en lo que respecta al hecho de la víctima, la doctrina tradicional ha entendido desde hace tiempo que la conducta, comportamiento, acción u omisión de la víctima cuando contribuye de manera determinante y exclusiva a la producción del daño constituye una causal eximente de responsabilidad, fundada en el irresistibilidad, imprevisibilidad y carácter externo a la actividad del demandado^[3].

Sin embargo, ésta no ha sido la única lectura del derecho de la responsabilidad en su dogmática tradicional, porque los anteriores elementos hacen parte más de los ingredientes ordinarios de otra causal eximente como es la fuerza mayor, por lo que siguiendo a René Savatier

se puede formular criterios adicionales para analizar el hecho exclusivo de la víctima:

(1) “cuando la víctima consiente un acto ilícito en sí mismo, la desaparición de la falta depende de saber si el deber de no lograrse es, o no, suprimido por el consentimiento de la víctima. Esto depende de la naturaleza del deber en causa”^[4];

(2) cuando “se trata del deber general de no dañar a otro, el consentimiento de la víctima al acto que es dañoso suprime, en principio, la falta, puesto que la víctima es libre de causarse este”^[5];

(3) cuando “el acto incriminado, sin ser directamente malo, crea solamente un peligro para la víctima, el consentimiento de aquella puede tener un efecto más amplio. Solamente excluye la falta, cuando la víctima estuviese en el derecho de consentir un daño, ya que respecto de ciertos daños la víctima no estaría en derecho de consentir directamente, pese a poder exponerse voluntariamente. Su consentimiento al peligro cubre entonces a los terceros que concurren a crearlo”^[6]

(4) sin “consentir conscientemente el peligro creado por otro, la víctima ha podido, por su propia conducta, aumentar de manera previsible y evitable, las posibilidades dañosas”^[7], como constitutivo de una imprudencia radicada en la conducta o comportamiento asumible, desplegado y operado por la propia víctima en los hechos que desencadenan el daño^[8];

y,

(5) la contribución del hecho de la víctima en la producción del daño antijurídico debe ser determinante para eximir plenamente de responsabilidad, o puede ser concurrente y representar una atribución tanto a la administración pública, como a la víctima, reduciéndose el “quantum” indemnizatorio proporcional y ponderadamente.

Por otra parte, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario aclarar, en cada caso concreto, si su el proceder □ activo u omisivo □ tuvo o no injerencia y en qué medida, en la producción del daño.

En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, es necesario que la conducta desplegada por la víctima sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la

causa adecuada, pues en el evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar, aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la participación de la víctima^[9].

Igualmente, esta Corporación ha entendido la culpa exclusiva de la víctima como elemento que excluye la responsabilidad del Estado, cuando hay “la violación por parte de ésta [víctima] de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado”^[10], que se concreta en la demostración “de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta”^{[11]- [12]}. Por último, la jurisprudencia de la Sección Tercera (y sus Subsecciones), ha establecido una serie de fundamentos o supuestos en los que cabe o no encuadrar el hecho o culpa de la víctima como eximente de responsabilidad de la administración pública:

- (1) se concreta por la experiencia de la víctima en el manejo de objetos, o en el despliegue de actividades^[13];
- (2) la “ausencia de valoración del riesgo por parte de las víctimas” puede constituir una “conducta negligente relevante”^[14];
- (3) puede constituirse en culpa de la víctima el ejercicio por los ciudadanos de “labores que no les corresponden”^[15];
- (4) debe contribuir “decisivamente al resultado final”^[16]; (5) para “que la conducta de la víctima pueda exonerar de responsabilidad a la entidad demandada, la misma debe ser causa determinante en la producción del daño y ajena a la Administración”, a lo que agrega, que en “los eventos en los cuales la actuación de la víctima resulta ser la causa única, exclusiva o determinante del daño, carece de relevancia la valoración de su subjetividad”^[17];

(6) la “violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado”, la que “exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño cuando ésta es exclusiva”^[18];

(7) por el contrario no se configura como eximente cuando no hay ni conocimiento de un elemento o actividad que entraña peligro, ni hay imprudencia de la víctima^[19];

(8) se entiende la culpa exclusiva de la víctima “como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado”^[20], lo que cabe encuadrar, matizando, en el primer supuesto porque no sólo opera por virtud del consentimiento de un acto ilícito, sino al despliegue de una conducta que es violatoria de las obligaciones a las que está llamado a cumplir (v.gr., en la conducción de vehículos a la velocidad ordenada, a la distancia de seguridad, a la realización de maniobras autorizadas, al respeto de la señalización, etc.);

(9) debe demostrarse “además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta”^[21], lo que encuadra en el cuarto supuesto dogmático de la imprudencia de la víctima;

(10) que se acrediten los elementos objetivos de la conducta gravemente culposa de la víctima^[22]; y,

(11) que la víctima “por sus propios hechos y actuaciones se puso en condiciones de soportar el daño”^[23].

Es de reiterar, que el daño es un elemento indispensable para la existencia de la responsabilidad, pero cuya sola presencia no convierte, de suyo, a quien lo sufre en acreedor de una indemnización.

La causa del siniestro no puede situarse aisladamente por lo que describe la demandante como un hueco que la sorprende en la vía haciéndola perder el control; la conducta de operar o conducir vehículos es integral y comprende los

momentos precedentes, de tal manera que los movimientos automáticos que realiza el conductor (acelerar, cambiar las velocidades, disminuir la aceleración o frenar) están dentro de la acción global de conducir, que en su conjunto pueden valorarse como voluntarios, de allí que se pueda inferir si fueran correctos o imprudentes.

Se enfatiza el hecho, que la actividad desarrollada por la actora ha sido catalogada por la jurisprudencia como de alto riesgo y peligrosa. Así las cosas, la señora **JANET VIVIANA RUIZ GÓMEZ RUIZ**, le correspondía realizar la actividad de conducción de la motocicleta acatando las disposiciones del Código Nacional de Tránsito, como es lo dispuesto en el Artículo 55, sobre la obligatoriedad para toda persona que tome parte en el tránsito, como conductor o como peatón, de comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a los demás y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que le den las autoridades de tránsito.

Frente a la imputabilidad

Se pretende endilgar las consecuencias del accidente ocurrido el día 19 de noviembre de 2022 al Municipio de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura, afirmando que ocurrió por falta de señalización y mantenimiento o reparaciones en la vía como causa eficiente.

Corresponde entonces a la parte demandante, demostrar en este punto, que existió la falla en el servicio, así como que la misma haya sido la **causa eficiente** que dio lugar al daño antijurídico generado, lo cual hasta a esta altura procesal no se ha demostrado.

En relación con el tema, es pertinente traer a colación lo esgrimido por el Consejo de Estado en sentencia de octubre de 1995, Expediente 9535, que señaló:

"Por lo anterior, los hechos objeto del proceso deben manejarse dentro del régimen de la falla ordinaria o probada, en el cual al demandante le incumbe la demostración de todos los elementos que configuran la responsabilidad estatal.

“Y, toda vez que se imputa una omisión administrativa, la parte actora debe, además de probar la existencia del perjuicio y su relación de causalidad con la omisión de la cual él se deriva, acredita la existencia de la obligación legal o reglamentaria que imponía a la administración la realización de la conducta con la cual los perjuicios no se habrían producido. O, lo que es lo mismo, debía acreditar la existencia de la falla del servicio consistente en el cumplimiento de un deber y demostrar que dicha falla fue la causante del daño”.

Como bien se puede colegir, la parte demandante con el incipiente acervo probatorio allegado no demuestra que la presunta falla en el servicio haya sido la causa del accidente.

Al respecto se pronunció el Consejo de Estado en Sentencia del 22 de abril de 2009, expediente 16192:

(...) Asimismo habría que señalar que la conducción de vehículos automotores constituye una actividad peligrosa que involucra a quienes hacen parte de ella, de forma que en aquellos eventos en los que tiene ocurrencia un accidente y, como consecuencia de ello, se causan daños, es necesario verificar la conducta de los partícipes de dicha actividad, en aras de establecer cuál fue la verdadera causa que lo provocó. En todo caso, el juez deberá tomar en consideración la peligrosidad de la actividad, la conducta de las personas implicadas en ella, la incidencia de ambas en el percance o la virtualidad dañina de la una frente a la otra. (...) Subraya por fuera de texto.

Señor Juez, es claro que la actividad peligrosa la ejercía el conductor, y no la administración pública, lo cual impide predicar la falla presunta del servicio, más aún, cuando corresponde al actor probar su ocurrencia en virtud de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso.

VII. EXCEPCIONES

Me permito proponer las siguientes excepciones:

- **INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD A CARGO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI**

Se sustenta esta excepción en el hecho de que la parte actora no demuestra una relación de causa-efecto, teniendo en cuenta que el supuesto daño ocasionado no fue producto de una acción u omisión del Distrito de Cali, pues como se dijo antes, el accidente tiene su causa eficiente en la falta de prevención y cuidado para maniobrar dicho vehículo al hacer una actividad física que exige esfuerzo y pericia para la conducción de motocicletas.

Los medios de prueba anexados no arrojan claridad sobre la forma en que sucedieron los hechos que se pretendían demostrar; la parte accionante no acredita que la precipitación de la motocicleta fue producto de un hecho en la vía de acceso público; tampoco está acreditado que el supuesto imperfecto que se presentaba en la superficie vial hubiese sido de una magnitud que pudiese poner en riesgo de caídas o accidentes a las personas que transitaban el lugar, o que hubiese sido conocido por la entidad accionada u otras autoridades. En ese orden de ideas no se encuentra acreditado en el plenario nexo de causalidad entre la desatención de las funciones de mantenimiento de las vías por parte del ente territorial y el daño sufrido por los actores; por consiguiente, no puede considerarse que el Distrito omitió su deber de prevenir el peligro que implicaba dicho hueco y que no prestó el servicio que se deriva de sus obligaciones de administración con la efectividad y eficiencia que se espera de sus competencias.

Para el presente caso debe examinarse la situación bajo el régimen de la falla probada, en la cual a la parte demandante le compete, demostrar todos los elementos que configuran la responsabilidad Estatal, y ya que se imputa una omisión administrativa, **corresponde a la parte actora probar la existencia del perjuicio y su relación de causalidad con la omisión de la cual él se deriva**, acreditar la existencia de la falla del servicio consistente en el cumplimiento de un deber y **demostrar que dicha falla fue la única causante del daño**.

En el presente caso no se da la falla del servicio; el accidente no fue producto de una acción u omisión del Distrito de Cali, y la única hipótesis que fluye de los elementos probatorios es que la conductora, debía tener él un máximo cuidado y pericia, considerando la situación de riesgo que genera conducir una motocicleta, actuó con falta de precaución, siendo causante de su propio accidente, pues la vía por donde presuntamente se desplazaba, es una vía amplia

con buena iluminación; y de acuerdo a lo presentado no prueba que fue un presunto bache el que causó dicho accidente.

De la probanza aportada al expediente está claro que el Distrito de Santiago de Cali no es responsable del accidente ocurrido el día 19 de noviembre de 2022, en el que resultó lesionada la señora Nathalia Real Loaiza , puesto que no se puede atribuir de este ente, una irregularidad, omisión, negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones.

- **CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA COMO CAUSAL EXIMIENTE DE RESPONSABILIDAD**

No obstante, se tiene que en el presente caso no existe la falla del servicio alegada, se invoca como causal de exoneración, en caso de posición en contrario, la culpa exclusiva de la víctima, como eximente de responsabilidad.

En efecto, una de las causas ajenas que se acepta como fenómeno liberador de la responsabilidad por ruptura del nexo causal es el hecho de la víctima, cuando es determinante, cuando influye en el resultado y por ello tiene implicaciones diferentes en el campo indemnizatorio. Su participación puede influir en el resultado, en proporción a su causalidad, para el caso que nos ocupa, quien transitaba en la motocicleta Señora JANET VIVIANA RUIZ, la cual debía conducir con cuidado, atención y precaución, también le exigía tener en buenas condiciones de mantenimiento la motocicleta, toda vez que estaba realizando una actividad peligrosa.

Es importante recalcar que la conducción de este tipo de vehículos exige además una pericia de la persona que lo maneja, pues sus especificaciones técnicas y diseño permiten desarrollar altas velocidades, además que ofrecen alta inestabilidad, lo que no se compadece con la inseguridad que brindan estos vehículos para quien los utiliza, pues no poseen ningún sistema de seguridad adicional para la integridad de la persona distinta a la propia pericia y capacidad de maniobra de quien lo conduce.

Se debe destacar que la conducción de vehículos constituye una actividad peligrosa que involucra a quienes participan de ella, de forma que en aquellos eventos en los que ocurre un accidente y como consecuencia de ello, se producen daños a una persona, es necesario verificar la conducta de los partícipes de dicha actividad, u

otro tipo de circunstancias que rodean los hechos, en aras de verificar la causa de este.

La responsabilidad derivada de la práctica de actividades peligrosas o riesgosas se encuentra por completo desligada de toda consideración sobre la culpa o diligencia o prudencia de quien ocasiona el daño, que hace responsable de los perjuicios a quien crea la situación de peligro.

La parte demandante ha pretendido hacer ver que existe relación entre el presunto accidente acaecido el día 19 de noviembre de 2022, y la supuesta falla del servicio consistente en la existencia de una "hueco en la vía". Esta postura resulta insostenible en cuanto que no existe prueba que dé cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y, lugar en que los hechos ocurrieron, constituyéndose lo anterior en simple manifestación carente de sustento que aún no ha sido debidamente probado por quien corresponde, es decir, por la parte demandante.

Por lo mismo se reitera, la teoría de la causalidad adecuada, la cual sostiene que no todas las condiciones que concurren a un resultado adquieren la categoría de causas que originen la responsabilidad. Hay que separar, escoger, aquellos fenómenos, circunstancias, hechos que realmente fueron determinantes e influyeron en el resultado.

Si la conductora hubiese adoptado una conducta prudente y cumpliendo las normas del Código Nacional de Tránsito, es seguro que no se hubiese presentado el accidente o los daños hubiesen sido menores. La sana lógica nos deja pensar que la lesionada no tuvo el suficiente cuidado y precaución al transitar por la vía el día del accidente, pues el llevar una velocidad adecuada le hubiera permitido evitar riesgos.

La duda sobre la falla del servicio y aún más la duda sobre si fue esa presunta falla la causante del daño, no permite configurar el nexo causal que se exige para predicar responsabilidad de la Administración Distrital.

Es conducente traer a cita las precisiones de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en Sentencia 1998-05970 de junio 9 de 2010, señalándose lo siguiente:

"2. 2. El hecho exclusivo de la víctima como eximente de responsabilidad o causal excluyente de imputación.



"Las tradicionalmente denominadas causales eximentes de responsabilidad fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima constituyen diversos eventos que dan lugar a que devenga jurídicamente imposible imputar, desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad por los daños cuya causación da lugar a la iniciación del litigio, a la persona o entidad que obra como demandada dentro del mismo. En relación con todas ellas, tres son los elementos cuya concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea procedente admitir su configuración: (1) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad y (iii) su exterioridad respecto del demandado, extremos en relación con los cuales la jurisprudencia de esta sección ha sostenido lo siguiente:

"En cuanto tiene que ver con (i) la irresistibilidad como elemento de la causa extraña, la misma consiste en la imposibilidad del obligado a determinado comportamiento o actividad para desplegarlo o para llevarla a cabo; en otros términos, el daño debe resultar inevitable para que pueda sostenerse la ocurrencia de una causa extraña, teniendo en cuenta que lo irresistible o inevitable deben ser los efectos del fenómeno y no el fenómeno mismo -pues el demandado podría, en determinadas circunstancias, llegar a evitar o impedir los efectos dañinos del fenómeno, aunque este sea, en sí mismo, irresistible, caso de un terremoto o de un huracán (C. C., art. 64) algunos de cuyos efectos nocivos, en ciertos supuestos o bajo determinadas condiciones, podrían ser evitados -.

"Por lo demás, sí bien la mera dificultad no puede constituirse en verdadera imposibilidad, ello tampoco debe conducir al entendimiento de acuerdo con el cual la imposibilidad siempre debe revestir un carácter sobrehumano; basta con que la misma, de acuerdo con la valoración que de ella efectúe el juez en el caso concreto, aparezca razonable, como lo indica la doctrina:

"La Imposibilidad de ejecución debe interpretarse de una manera humana y teniendo en cuenta todas las circunstancias: basta que la imposibilidad sea normalmente insuperable teniendo en cuenta las condiciones de la vía.

"En lo referente a la imprevisibilidad, suele entenderse por tal aquella circunstancia respecto de la cual "no sea posible contemplar por anticipado



ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
OFICINA DE INVESTIGACIÓN

su ocurrencia', toda vez que "Prever", en el lenguaje usual, significa ver con anticipación' , entendimiento de acuerdo con el cual el agente causante del daño solo podría invocar la configuración de la causa extraña cuando el hecho alegado no resulte imaginable antes de su ocurrencia, cuestión de suyo improbable sí se tiene en cuenta que el demandado podría prefigurarse, aunque fuese de manera completamente eventual, la gran mayoría de eventos catalogables como causa extraña antes de su ocurrencia, más allá de que se sostenga que la imposibilidad de imaginar el hecho alude a que el mismo jamás hubiera podido pasar por la mente del demandado o a que este deba prever la ocurrencia de las circunstancias que resulten de más o menos probable configuración o a que se entienda que lo imprevisible está relacionado con el conocimiento previo de un hecho de acaecimiento cierto.

"Sin embargo, el carácter imprevisible de la causa extraña también puede ser entendido como la condición de "imprevisto" de la misma, esto es, de acontecimiento súbito o repentino, tal y como lo expresan tanto el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, como el artículo 64 del Código Civiles y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con la cual imprevisible será cuando se trate de un acontecimiento súbito, sorpresivo, excepcional, de rara ocurrencia'. La recién referida acepción del vocablo "imprevisible" evita la consecuencia a la cual conduce el entendimiento del mismo en el sentido de que se trata de aquello que no es imaginable con anticipación a su ocurrencia, toda vez que esta última comprensión conllevaría a que la causa extraña en realidad nunca operase, sí se tiene en cuenta que prácticamente todos los sucesos que ocurren a diario ya han sido imaginados por el hombre.

"No está de más señalar, en cualquier caso, que la catalogación de un determinado fenómeno como imprevisible excluye, de suyo, la posibilidad de que en el supuesto concreto concorra la culpa del demandado, pues sí este se encontraba en la obligación de prever la ocurrencia del acontecimiento al cual se pretende atribuir eficacia liberatoria de responsabilidad y además disponía de la posibilidad real y razonable de hacerlo, entonces los efectos dañinos del fenómeno correspondiente resultarán atribuibles a su comportamiento culposos y no al advenimiento

del anotado suceso. Culpa e imprevisibilidad, por tanto, en un mismo supuesto fáctico, se excluyen.

"Así pues, resulta mucho más razonable entender por imprevisible aquello que, pese a que pueda haber sido imaginado con anticipación, resulta súbito o repentino o aquello que no obstante la diligencia y cuidado que se tuvo para evitarlo, de todas maneras, acaeció con independencia de que hubiese sido mentalmente figurado, o no, previamente a su ocurrencia. En la dirección señalada marcha, por lo demás, la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual ha matizado la rigurosidad de las exigencias que, en punto a lo "inimaginable" de la causa extraña, había formulado en otras ocasiones:

"Y, por otra parte, en lo relacionado con (iii) la exterioridad de la causa extraña, si bien se ha señalado que dicho rasgo característico se contrae a determinar que aquella no puede ser imputable a la culpa del agente que causa el daño o que el evento correspondiente ha de ser externo o exterior a su actividad, quizás sea lo más acertado sostener que la referida exterioridad se concreta en que el acontecimiento y circunstancia que el demandado invoca como causa extraña debe resultarle ajeno jurídicamente, pues más allá de sostener que la causa extraña no debe poder imputarse a la culpa del agente resulta, hasta cierto punto, tautológico en la medida en que si hay culpa del citado agente mal podría predicarse la configuración al menos con efecto liberatorio pleno de causal de exoneración alguna, tampoco puede perderse de vista que existen supuestos en los cuales, a pesar de no existir culpa por parte del agente o del ente estatal demandado, tal consideración no es suficiente para eximirle de responsabilidad, como ocurre en los casos en los cuales el régimen de responsabilidad aplicable es de naturaleza objetiva, razón por la cual la exterioridad que se exige de la causa del daño para que pueda ser considerada extraña a la entidad demandada es una exterioridad jurídica, en el sentido de que ha de tratarse de un suceso o acaecimiento por el cual no tenga el deber jurídico de responder la accionada.

"Por otra parte, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder activo u omisivo de aquella tuvo, o no, injerencia y en qué

medida, en la producción del daño. En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, es necesario que la conducta desplegada por la víctima sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada, pues en el evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar, aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la participación de la víctima.

Teniendo en cuenta los hechos contentivos en el libelo de la demanda, tenemos que la conducta reúne las exigencias que la jurisprudencia ha determinado para que se constituya la culpa exclusiva y determinante de la víctima.

Denótese Honorable Juez, que la parte demandante no aportó una sola prueba idónea dirigida a indicar que la Administración Distrital a través de sus servidores, actuó en aras de que ocurrieran tan lamentable hecho; por ende, es plenamente claro que las presuntas lesiones sufridas por la señora **JANET VIVIANA RUIZ GÓMEZ RUIZ** no pueden haber tenido como causa el actuar de la Administración Distrital, sino de manera exclusiva el actuar de ella como conductora.

No sobra señalar a modo reiterativo Honorable Juez, que el hecho dañoso resultó imprevisible para la Administración Distrital. En este evento la señora **JANET VIVIANA RUIZ GÓMEZ RUIZ**, estaba realizando una actividad peligrosa donde debe actuar no sólo con diligencia y cuidado pues se responde hasta por la culpa levísima en que se pudo incurrir, como por ejemplo conducir un vehículo sin las mínimas medidas de prevención y sin acogerse a los preceptos determinados en la normatividad respectiva y así contribuir a su daño.

Sobre el particular se pronunció el Consejo de Estado Expediente No. 9722, Diciembre 9 de 1996, Consejero Ponente, Juan de Dios Montes Hernández, en los siguientes términos:

"Quien conduce debe prever aun aquellos eventos derivados de la imprudencia o inobservancia de los demás, ello tiene su límite en la razonable probabilidad del peligro y por ello no puede pretenderse del conductor la previsión de la remota posibilidad; a él se le exige es una actitud síquica en la que prevea aquellos sucesos que se presentan con notorio

grado de probabilidad, es decir, en lo que la ocurrencia del daño a un interés jurídico pueda ser evitada con su contribución activa; más allá de este límite su conducta se desplaza a lo fortuito o a la fuerza mayor".

Por todas las anteriores consideraciones, es que se considera que la falla del servicio no está probada, no existe nexo causal eficiente y se desconocen las circunstancias que rodearon el accidente, siendo de otro lado clara la participación de la víctima en el desarrollo de una actividad peligrosa. Respetuosamente solicito al Señor Juez, se EXONERE de toda responsabilidad al ente territorial Distrito Especial de Santiago de Cali.

- **FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA:**

Se formula al despacho la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto de los hechos narrados en la demanda se establece como causa conexas al presunto accidente la existencia de una alcantarilla en mal estado. Así las cosas, y de encontrarse que el accidente fue ocasionado respecto al mal estado de la infraestructura del sistema de alcantarillado y acueducto, es preciso indicar que el mismo es responsabilidad directa de las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP.

La competencia para la adecuación, reparación y/o mantenimiento de los drenajes, sumideros o alcantarillas de las vías, así como la reposición de las tapas de las mismas, corresponde a EMCALI, en atención a lo preceptuado en la ley 142 de 1994, en su artículo 28 que a la letra reza:

(...)

Las empresas tienen la obligación de efectuar el mantenimiento y reparación de las redes locales, cuyos costos serán a cargo de ellas.

(...)

De igual manera lo estipula el Decreto 302 de 2000, en su artículo 22.

ARTICULO 22 MANTENIMIENTO DE LAS REDES PÚBLICAS. *La entidad prestadora de los servicios públicos está en la obligación de hacer el mantenimiento y reparación de las redes públicas de acueducto y alcantarillado."*

Cabe concluir que el cuidado, mantenimiento y reparación de los sumideros y alcantarillas es competencia exclusiva de EMCALI, y como se mencionó

anteriormente en caso de que la parte atora lograra probar que la causa del accidente fue una tapa de alcantarilla, después de los dicho en líneas anteriores se coloca a la entidad de servicio público como la directa responsable en los hechos narrados por la parte actora; en consecuencia resulta procedente la excepción de Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva respecto al Distrito Especial de Santiago de Cali.

- **INNOMINADA**

Solicito muy respetuosamente al momento de proferir sentencia, se sirva declarar de oficio todos los hechos exceptivos que sean advertidos y probados en el curso del proceso y que resulten favorables a la entidad que represento.

VIII. PRUEBAS

Como pruebas, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 de la Ley 1437 de 2011 solicito tener en cuenta como pruebas las presentadas y pedidas por la parte actora, con la posibilidad de ser controvertidas en el transcurso del proceso.

Interrogatorio de parte. Solicito al Despacho decretar el interrogatorio de parte de la señora **JANET VIVIANA RUIZ para que absuelva interrogatorio sobre** las condiciones de tiempo, modo y lugar del presunto accidente.

IX. LLAMAMIENTO EN GARANTÍA Y ANEXOS

En escrito separado con el fin de que se hagan parte en el presente proceso, me permito formular Llamamiento en Garantía a las Compañías Aseguradoras: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A se encuentran: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, SBS SEGUROS COLOMBIA S.A - ANTES AIG SEGUROS GENERALES quienes figuran en la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1507222001226, expedida por la Compañía de Seguros 1507222001226. También se aportan Certificados de existencia y Representación Legal expedidos por la Cámara de Comercio de Bogotá.

X. SOBRE COSTAS

Solicito al Honorable Juez se condene en costas a la parte demandante, en la medida en que está facultado para ello en virtud de lo establecido en el artículo 188 del C.P.A. y de lo C.A. (Ley 1437 de 2011).

ANEXOS

Los siguientes documentos:

- 1) Poder especial a mi conferido por la Directora Jurídica del Distrito Especial de Santiago de Cali, con sus respectivos anexos.
- 2) Documento con el cual se da contestación a la demanda folios.
- 3) Escrito de Llamamiento en Garantía.
- 4) Copia Póliza N. 1507222001226, expedida por la Compañía de Seguros MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA con vigencia desde el (30) de Abril de 2022 hasta el (1) de diciembre de 2022.
- 5) Certificados de Existencia y Representación legal expedidos por Cámara de Comercio de Bogotá de las compañías de Seguros: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A se encuentran: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, SBS SEGUROS COLOMBIA S.A - ANTES AIG SEGUROS GENERALES donde figuran los respectivos datos para efectos de notificaciones.

XI. NOTIFICACIONES – CANALES DIGITALES DE COMUNICACIÓN

El Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura, recibirá notificaciones en el correo electrónico: notificacionesjudiciales@cali.gov.co El suscrito apoderado, en el correo electrónico: aura.maria.benavides07@gmail.com

Por instrucciones del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública del Distrito de Santiago de Cali, las actuaciones de la entidad se remitirán a través del correo electrónico institucional ejercicio.defensa01@cali.gov.co el cual no está destinado para recibir notificaciones.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
OFICINA DE INGENIERÍA DE TRÁFICO

Respetuosamente,

Aura María Benavides Ávila
C.C. No. 1.112.460.391 de Jamundí
T.P 220.484 C.S.J